

La cohesión y la seguridad ciudadana: un enfoque global

KLEIN J.L., ENRÍQUEZ D. Y VEGA R.V.

Universidad de Quebec en Montreal, UQAM, Canadá

Resumen

El artículo revisa el concepto de cohesión social y la noción de seguridad, partiendo del análisis de los profundos desequilibrios y desigualdades sociales que el modelo económico dominante a escala global desde los años 1980 crea o intensifica en América Latina. Centrado en las transformaciones que generaron la pérdida de confianza en las instituciones, en el Estado, en el mercado del trabajo, en la educación, incluso en la religión y en la familia, sobre las cuales reposaba la solidaridad orgánica en el marco de la sociedad industrial capitalista, examina cinco indicadores de la existencia de problemas de inseguridad en relación con la cohesión social. Pone de relieve que el problema de la inseguridad se asocia con la ruptura o la fragilidad de los mecanismos de integración y de mediación social y sostiene la necesidad de reconstruir la cohesión social para alcanzar la seguridad ciudadana, destacando que este proceso se funda en una profunda modificación política, económica y social enfocada en la inclusión social, de la que son co-responsables el Estado y los ciudadanos como actores de su propio desarrollo.

Palabras clave: cohesión social / seguridad ciudadana / instituciones/ inclusión social

Abstract

The article reviews the concept of social cohesion and the notion of security, based on deep analysis of the imbalances and inequalities that the dominant economic model on a global scale since 1980 creates or intensifies in Latin America. Focused on the changes that generated a loss of confidence in institutions in the state, labor market, education, even religion and family, on which rested the organic solidarity within society industrial capitalism, examines five indicators of the existence of problems of insecurity in relation to social cohesion. Highlights that the problem of insecurity is associated with the break or fragility of the mechanisms of social integration and mediation and supports the need to rebuild social cohesion to achieve security, noting that this process is based on profound political change, economic and social focus on social inclusion, of which are co-responsible for the state and citizens as actors in their own development.

Keywords: social cohesion / public security / institutions / social inclusion

1) Este trabajo se inserta en un proyecto de investigación intitulado "Social Polis: Social Platform on Cities and Social Cohesion" (www.socialpolis.eu). Financiado por la Comisión Europea (2007-2010), este proyecto ha reunido a equipos universitarios de 11 países (10 equipos europeos y uno canadiense) y han participado en él, en diversas actividades (foros, seminarios, reuniones, documentos, investigaciones), investigadores de América del Norte, de América del Sur, de Asia y de África. La coordinación general del proyecto estuvo a cargo de Frank Moulart y los trabajos en América del Norte y en América del Sur se realizaron bajo la responsabilidad de Juan-Luis Klein.

2) Juan-Luis Klein es profesor titular en el Departamento de Geografía y director del Centro de Investigación sobre las Innovaciones Sociales (Centre de recherche sur les innovations sociales: CRISES) en la Universidad de Quebec en Montreal.

3) Darío Enriquez es estudiante del Doctorado en Estudios urbanos en la Universidad de Quebec en Montreal.

4) Reina Victoria Vega es estudiante del Doctorado en Estudios urbanos en la Universidad de Quebec en Montreal.

Introducción

El objetivo de este artículo es proponer una visión global acerca del sentimiento de seguridad, o más bien de inseguridad, en relación con la cohesión social. En muchas partes de este mundo globalizado de la post industrialización, el tema de la cohesión social ha vuelto a ocupar un lugar especial en el interés de investigadores sociales, intervinientes, diseñadores y ejecutores de política social, etc. Esto se atribuye a la evidencia que el modelo económico dominante a escala global desde los años 1980 crea profundos desequilibrios y desigualdades sociales, intensificando por lo demás los que ya existían. A su vez, tal situación se traduce en la pérdida de confianza en las instituciones, es decir en el Estado, en el mercado del trabajo, en la educación, incluso en la religión y en la familia, es decir todas aquellas sobre las cuales reposaba la solidaridad orgánica en el marco de la sociedad industrial capitalista. La noción de bien común se ve progresivamente relegada, siendo remplazada por valores que ponen énfasis en el individualismo. La inspiración liberal de las políticas implantadas por los gobiernos reduce el rol del Estado a ser mero promotor del mercado, perdiendo así su papel de regulador y de protector social en los países en los cuales el Estado jugaba este papel. Así, es bajo esta perspectiva que deseamos plantear la cuestión de la seguridad. Nuestra hipótesis es que no puede haber seguridad en sociedades en las cuales los mecanismos de integración y de mediación social son frágiles o simplemente no funcionan. Sin protección social la seguridad individual no es posible a escala global. En ausencia de mecanismos de integración y de protección social, son las relaciones de fuerza entre individuos y grupos las que entran en juego. Es por ello que la relación entre la seguridad ciudadana y la cohesión social nos parece fundamental.

Ambos conceptos, la cohesión social y la seguridad serán revisados en conjunto en este artículo. En primer lugar, se presentará someramente la problemática de la cohesión social en el marco de la globalización. En segundo lugar, analizaremos la cuestión de la seguridad a partir de un enfoque estructurado en torno a cinco grandes temas, que consideramos como indicadores de la existencia de problemas de inseguridad en relación con la cohesión social. Estos indicadores son: 1) el acceso a respuestas adecuadas a las necesidades básicas (vivienda, alimentación, salud, educación), lo que nos lleva al tema del bienestar y la pobreza; 2) el acceso al mercado laboral, especialmente en tiempos de movilidad, de flexibilidad y de *flexiguridad*; 3) el uso de la ciudad en lo que respecta al transporte, al espacio público y a las zonas recreativas; 4) el sentimiento de pertenencia y la identidad cultural como bases de interdependencia y de interrelaciones sociales; 5) la protección física en relación con la violencia cotidiana y la delincuencia. En tercer lugar, presentaremos un cuadro sintético.

La aproximación a la cultura desde la perspectiva de la cohesión social en relación con la seguridad es un asunto que no está exento de polémica. Según Yudice (2008), un amplio sector de teóricos sociales afirman que hoy en día -en nombre de la cohesión social- se combate el reconocimiento de identidades colectivas diversas, ya que se concibe como una amenaza a la identidad "oficial" dominante el hecho de reconocer a la diversidad en

materia de identidad, y los derechos que lo acompañan. Esta interpretación indica una concepción de cohesión social como respuesta frente a la pluralidad de identidades, y al miedo de que estas reclamen reconocimiento y derechos, como es el caso de los migrantes. Sin embargo, existe una concepción diferente de cohesión social, a la cual adherimos en este artículo, la cual no busca homogeneidad sino más bien el respeto y el reconocimiento de la diferencia (Boltanski y Chiapello, 1999). Según esta perspectiva, las diferencias culturales constituyen una riqueza, siempre y cuando ello no nos lleve a la justificación de desigualdades sociales y económicas que excluyan a grupos de la sociedad y fragilicen sus derechos ciudadanos.

1. Marco conceptual: la cohesión social en el contexto de mundialización

La cohesión social es el resultado de varios factores. Uno de ellos tiene base en el hecho de compartir valores comunes entre los miembros de una colectividad (Jenson, 1988; Jenson, 2002; Forrest y Kearns, 2001). Otro factor está ligado a la calidad de las interacciones y los lazos que se establecen entre las diversas capas de regulación de una sociedad. La cohesión social depende también del nivel de confianza de los ciudadanos respecto de sus instituciones, lo que constituye una condición ineludible en el compromiso individual con la colectividad. A este compromiso debemos agregar otro, aquel que establecen mutuamente las comunidades que forman una sociedad, puesto que a la cooperación entre ciudadanos es necesario agregarle la cooperación entre territorios (Faludi, 2007; Moulaert et Nussbaumer, 2008; Servillo, 2008).

El interés por la problemática de la cohesión social retoma una antigua preocupación de las ciencias sociales, abordada generalmente en relación al Estado-Nación. Durkheim (1933) fue el primero en referirse a dicha problemática, cuando abordó las diversas formas de solidaridad que podían existir en una sociedad moderna, organizada bajo la lógica de la división del trabajo. Después de Durkheim, muchos teóricos de las ciencias sociales han hablado de ello en forma implícita o explícita (Pahl, 1991; Jenson, 1998), a menudo desde una perspectiva crítica (Bernard, 1999). En los años de gloria del Estado-Providencia (Esping-Andersen, 1990), el tema de la estabilidad en materia de cohesión social fue considerado como algo consustancial a los niveles de bienestar alcanzados por la sociedad, por lo tanto la problemática de la cohesión social fue dejada de lado en el debate científico. Éste privilegió otras cuestiones, sobre todo aquellas ligadas al tema del cambio social, la lucha de clases y los movimientos sociales. Teniendo en cuenta esta situación, nos preguntamos entonces: ¿Por qué hablar hoy de cohesión social en el contexto de la "nueva economía" y por qué privilegiar en la discusión a la ciudad por encima de la nación?

Muchos autores sostienen que las transformaciones inherentes a la emergencia de un modelo económico basado en la nueva economía informacional (Castells e Himanen, 2002), en las redes globales (Scott, 2001), en la concentración de funciones de dirección en las urbes convertidas en "ciudades globales" (Sassen, 2002), y en las transformaciones del mercado de trabajo (Castel, 2008 y 2009; Laville, 2008; Tremblay, 2008), afectan

profundamente y llevan a la inoperancia a las instituciones de escala nacional (Sassen, 1996), precisamente aquellas que aseguraban hasta ese momento la cohesión social. Como lo muestra de hecho el análisis de Lupton y Fuller (2009) a partir del caso de Inglaterra, la adaptación de los Estados a este modelo ha debilitado la función gubernamental de regulación del mercado. El Estado era en el pasado la base sobre la que se apoyaba fuertemente la construcción de la cohesión social, pero con el advenimiento del nuevo modelo económico que ha transformado los gobiernos en "agentes del mercado", el Estado dejó de ser el responsable principal de la construcción y fortalecimiento de la cohesión social. El nuevo modelo económico nos permite apreciar claramente eso que Harvey (1999) ha denominado "gobierno empresarial", aspecto que Sparke (2005) ha documentado bastante bien en el contexto canadiense.

Este texto nos permitirá justamente analizar el problema de la seguridad, o más bien la falta de seguridad. Este aspecto es uno de los elementos que revela con mayor claridad el debilitamiento de la cohesión social. Para ello, nos concentraremos en el análisis de la realidad latinoamericana.

2. El problema de la inseguridad como revelador de la ruptura social

Diversos autores han establecido que las dificultades que enfrenta la sociedad latinoamericana de nuestro tiempo en materia de cohesión social provienen de la situación de inseguridad que padecen numerosos grupos sociales afectados por problemas importantes de exclusión y de segregación (Reguillo, 2000; Cozzani, 2008). El panorama urbano que caracteriza a las ciudades en América Latina en la actualidad es descrito por Quesada (2006): crecimiento sin control, producto de la migración; formación de *megaciudades* y de grandes aglomeraciones; extensión de los cinturones de miseria en las periferias urbanas; la continua segregación de la población en enclaves residenciales exclusivos; la transformación del espacio público; la pérdida de significación de los lugares públicos tradicionales como las plazas o parques centrales; el creciente aumento de las desigualdades.

Como consecuencia de ello surgen diversos problemas, tales como el crecimiento físico sin control, la insuficiencia de los servicios públicos, la contaminación del aire, la congestión del tráfico y la insuficiencia de recursos, entre otros. Factores que influyen en el deterioro de las condiciones de vida de la población y el incremento de cinturones de extrema pobreza. Lo anterior ha propiciado una transformación del paisaje en las ciudades de América Latina. De otro lado, la segregación residencial se incrementa en los estratos altos y medios, se adoptan sistemas de seguridad privada y el acceso a ciertas áreas residenciales es restringido (condominios, vías públicas de uso exclusivo, cordones de seguridad para el acceso a lugares públicos, etc.)

Este panorama genera una situación de inseguridad que presenta diferentes dimensiones (Wagman, 2004) entrelazadas unas a otras: primero, el problema de la delincuencia y el crimen en la vida diaria; segundo, la existencia de múltiples dinámicas sociales o naturales

que actúan produciendo una larga lista de acontecimientos tales como desastres naturales, crisis económicas, accidentes de transporte, pérdidas de empleo, etc.; tercero, la existencia de un sentimiento o sensación de inseguridad, percepción que evidencia claramente la existencia de una dimensión subjetiva de este problema, aunque haya o no haya justificación para sentirse seguro o inseguro; cuarto, mecanismos de ejercicio del poder en contextos de profunda desigualdad.

2.1. Las necesidades básicas

En el transcurso de los últimos cincuenta años, el crecimiento vertiginoso y a veces caótico de las ciudades en América latina ha sido fuertemente estimulado por la migración hacia las ciudades desde el campo habitado por campesinos empobrecidos y sin empleo. Las ciudades no estaban preparadas para recibir tal cantidad de campesinos que buscaban sobrevivir. Esto afectó a los servicios y a la calidad de vida. Las relaciones económicas, políticas y sociales cambiaron y la débil planeación de origen, en los casos en que existía, no fue respetada (Enríquez, 2008). Una sociedad fragmentada emerge como consecuencia de este proceso: discriminación al migrante interno y externo⁵; pauperización de la vida familiar; servicios públicos de baja calidad, cuando no inexistentes; segregación espacial de las ciudades; déficit alimentario en los sectores menos favorecidos, etc.

En el tema de la vivienda, las existentes en el mercado inmobiliario fueron insuficientes para acoger a los recién llegados. Los servicios de educación y salud, ya con un déficit de origen para atender a la población urbana de entonces, fueron totalmente desbordados por ese crecimiento demográfico desmedido. Tanto el campesinado que llegaba a las ciudades, así como los ciudadanos más pobres no tenían ni dinero ni acceso al crédito que les permitiera comprar terrenos propicios para la construcción de viviendas; tampoco podían pagar alquileres que demandaban un altísimo porcentaje de sus ingresos. Ellos decidieron entonces ocupar ilegalmente cualquier terreno disponible, generalmente desprovisto de servicios básicos y en la periferia de la ciudad o en lugares fuera del interés del negocio inmobiliario. Así, se producen las primeras invasiones y se forman las primeras *barriadas*⁶. Estas *barriadas*, que han ido cubriendo progresivamente todos los espacios alrededor de las grandes ciudades latinoamericanas, son la expresión más clara de una población pobre, que busca las oportunidades que el sistema económico legal les niega.

La realidad de hoy muestra un crecimiento económico sostenido y una transformación de los países latinoamericanos, pero las mejoras económicas y el bienestar sólo han alcanzado a algunos grupos sociales. Incluso en países que han conocido marcados índices de crecimiento económico, como es el caso de Chile, este bienestar está lejos de

5) Algunas países han soportado un fuerte proceso de migración externa desde otros países latinoamericanos, por ejemplo: Argentina en los 70s y 80s recibiendo muchos migrantes pobres de Paraguay, Bolivia, Chile y Perú; también Chile en los 90s hasta la actualidad con migrantes desde Bolivia y Perú.

6) Despectivo de barrio; son llamadas *Favelas* en Brasil, *Villas-miseria* en Argentina, *Pueblos Jóvenes* en el Perú, *Poblaciones callampas* en Chile, *Ranchos* en Venezuela, *Colonias* en México, etc.

haberse generalizado (Rodríguez y Sugranyes, 2005). De hecho, según todas las cifras conocidas, América Latina, es la región más desigual en el mundo, aunque no la más pobre. Los problemas subsisten, pero la diferencia que encontramos hoy respecto de lo que sucedía durante los años 60s y 70s son los emprendimientos comunitarios y la autogestión, que están cambiando las formas y las estrategias de la llamada lucha contra la pobreza.⁷

En muchas ocasiones, la misma población ha tomado en mano la solución a sus problemas más agudos y el Estado participa en la mayor parte de ellos sólo como acompañante de comunidades locales. Encontrándose incluso en situación de vulnerabilidad extrema, estas comunidades aplican por sí mismas sus propias soluciones, evidenciando una cultura de la solidaridad que ha favorecido de manera considerable la estabilidad social en los países con alto índices de pobreza (Costa y Gurza, 2006). Allí se logran frecuentemente beneficios para las familias, pero no necesariamente se convierten en derechos. Esto se da porque las políticas públicas que los apoyan aplican métodos clientelares y no de empoderamiento (Henríquez y Yépez, 2006: 176). En estas experiencias se destaca el papel jugado por la mujer, cuyo rol es fundamental en la construcción de lazos y redes de solidaridad primaria: familia, amigos, vecinos, etc.

Se ha mencionado muchas veces que la pobreza en el mundo tiene cara de mujer. Las soluciones que aportan las organizaciones comunitarias también. Los programas de compensación social y asistencia encuentran como intermediarias, en su gran mayoría, a mujeres. Estos programas involucran tres niveles: prestaciones de salud, pensiones de jubilación y el cuidado infantil. Las prestaciones de salud han merecido en los últimos años inversiones públicas importantes en infraestructura, aunque la calidad de los servicios aún sea baja, incluyendo las relacionadas con la maternidad, la invalidez, los accidentes de trabajo, la enfermedad del trabajador y la sobrevivencia a la muerte del único sostén económico de la familia. Sectores importantes no tienen acceso a pensiones de jubilación ni al cuidado infantil, a pesar de ciertos avances en estos aspectos (Uthoff, 2010).

Finalmente, hay una dimensión institucional que vale la pena agregar, ya que el acceso a las necesidades básicas va a depender de que el Estado cumpla el rol que se propone como institución. Más allá de las particularidades de cada país en la región latinoamericana, un elemento en común a señalar es la existencia, tanto en los sectores rurales como empobrecidos como en las grandes ciudades, de capas importantes de la población por debajo de un piso mínimo de desarrollo humano, en términos no sólo de bienes materiales y de acceso a servicios públicos, sino también de derechos civiles básicos (O'Donnell, 2003).

7) Villa El Salvador es un ejemplo en cuanto a una iniciativa comunitaria que instituye derechos ciudadanos y asegura una cierta seguridad ciudadana, aunque no siempre física. Comunidad autogestionaria al sur de Lima, su visión -establecida mediante una consulta popular- la define como una "ciudad generadora de riqueza" en lugar de aludir a la "lucha contra la pobreza" (Enríquez, 2008: 80).

2.2. El acceso al mercado laboral

Con diversos matices, las políticas económicas aplicadas en los países latinoamericanos, como por lo demás en el resto del mundo, han sido marcadas por estrategias que ponen al mercado como centro de interés, con Estados que intervienen en mayor o menor grado en tanto que agentes del mercado⁸. Quizás esas políticas hayan logrado sostener el crecimiento económico, en general, pero también han sometido el tejido social a presiones sumamente fuertes. La persistencia de niveles elevados de desempleo y subempleo, la polarización de los ingresos y el agravamiento de la exclusión social fomentan un sentimiento de inseguridad cada vez más vivo y generalizado en la población (Saint-Martin, 2004: 284).

En ciertos países como Argentina, Uruguay y Chile, donde durante decenios se había construido un Estado de Bienestar después de la segunda guerra mundial y en asociación con la estrategia económica de la sustitución de importaciones, hoy se han introducido políticas neoliberales que socavan la capacidad de acción del Estado. Si bien es cierto que, en algunos casos, se han aplicado políticas de inversión social con el fin de contrarrestar los efectos del modelo neoliberal (Saint-Martin, 2004), estas alivian las carencias pero no alteran los mecanismos de exclusión dominantes (Rodríguez y Sugranyes, 2005).

Una de las políticas a destacar es la que hoy se conoce bajo el nombre de *flexibilidad*. Este concepto combina la flexibilidad a la hora de contratar y despedir por parte de los agentes privados, con la protección social a los trabajadores por parte del Estado, que es también el responsable de las políticas de formación y reinserción laboral activa de éstos (Ramos, 2009). En teoría, se trata de una estrategia política encaminada a lograr un mercado de trabajo flexible, atractivo para los inversores, pero que garantice la protección social de los trabajadores (Tremblay, 2008). En Latinoamérica se han puesto en práctica algunos programas en esa línea durante los 90s, cuando la aplicación de políticas neoliberales y la consiguiente reducción del aparato estatal implicaron el despido de una gran cantidad de empleados públicos. Al final del primer decenio del siglo 21, el trabajo de Tokman, (2007) sobre las políticas de protección de los trabajadores en varios países latinoamericanos permite apreciar los resultados obtenidos a partir de la percepción ciudadana respecto de la combinación de instrumentos de flexibilización y de protección laboral. Según el autor, la situación que combina facilidades para el despido y compensaciones elevadas por desempleo y reinserción laboral, que es la más usual, es la que genera más inseguridad.

No es difícil comprobar que los espacios de vulnerabilidad laboral subsisten y se consolidan en las estructuras sociales y económicas del mundo globalizado (Castel, 2008; 2009; Laville, 2008). La pobreza se encuentra ligada no solo al desempleo, sino también a una precariedad laboral que implica bajos salarios y muy pocos beneficios sociales. De hecho, las cifras de hoy no muestran un real problema de desempleo, sino de subempleo o de precarización del empleo formal, cuando no de la preeminencia de la informalidad o el

8) En el sentido que dado por Lupton y Fuller (2009) en su análisis acerca del caso inglés.

empleo en negro. En ese escenario, no es muy importante el aporte de políticas públicas ni en inversión social, ni en la aplicación de la *flexiguridad*. Al mismo tiempo, es posible verificar que continúa un fenómeno de exclusión a partir de la discriminación de acceso al mercado laboral -incluso al precario- por edad, por género, por origen étnico, por condición de migrante legal o ilegal, y también por sufrir algún tipo de discapacidad. La poca protección social, que la mayoría de trabajadores tiene hoy en América Latina, se suma a las cuestiones de género, usualmente ignoradas, sobre todo en las modalidades de trabajo en servicios, zonas rurales, etc. (Henriquez y Yépez, 2006: 177).

2.3. El uso de la ciudad

Cuando las personas dominan un espacio, se sienten seguras en él (Bedoya et al., 1999). Sin embargo, el acceso de los diversos grupos que componen la sociedad en los diversos tipos de espacios urbanos, revela un conjunto de inequidades y desigualdades sociales que se intensifican en relación directa con la vulnerabilidad de estos grupos (Thomas, 1998). El espacio urbano como construcción social, condiciona la vida de sus habitantes y determina la calidad de los intercambios entre ellos. "La construcción social del espacio refiere a la experiencia simbólica del espacio mediada por los procesos sociales del intercambio, conflicto y control" (Low, 2000: 127-128).

La categoría de género sirve como herramienta para avanzar en "qué" y en "cómo" se expresan las desigualdades o diferencias en la vivencia del espacio urbano. Hombres y mujeres experimentan la ciudad, el barrio y la casa de distintas formas, no sólo por el hecho de desempeñar distintos roles y tener distintas posibilidades de acceso a los recursos, sino también distintas posibilidades y limitaciones para enfrentar sus necesidades de vivienda, trabajo, equipamientos y servicios (Saborido, 1999, p. 23).

Estos espacios de sociabilidad son aquellos en los que Rebolledo (1998) considera que se actualizan y ponen en juego las definiciones culturales de género. En la medida que hay definiciones de dominios y ámbitos diferenciados según el género, los espacios de sociabilidad aparecen impregnados de valores asignados a lo femenino, por ejemplo la casa, y a lo masculino, por ejemplo la calle, a la vez que habrá maneras diferenciales de ocuparlos o apropiárselos. Saborido y Segovia (1997) hacen referencia a la permanencia femenina en la vivienda y sus espacios inmediatos, y un movimiento masculino por la ciudad, que va y viene del trabajo a la casa. Las potencialidades de uso y diversidad de actividades que podrían desarrollar las mujeres y los hombres en los espacios urbanos cotidianos, son muchas veces obstruidas por patrones culturales que incluyen códigos discriminatorios y excluyentes. La desigualdad en el consumo del espacio público afecta también a los migrantes, a los ancianos, a los jóvenes y a los grupos indígenas⁹.

9) Aunque en la literatura científica no haya consenso en la aplicación de la categoría « indígena », en nuestro texto hacemos referencia no solo al origen étnico ligado al uso de una lengua diferente respecto de la oficial mayoritaria en el país, tampoco solo al hecho de habitar las zonas rurales generalmente deprimidas, sino sobre todo a un mestizaje que mantiene una mayor preeminencia de rasgos y cultura indígenas. Cuando sea al caso más específico, nos referiremos a « campesinos llegados a la ciudad desde un campo empobrecido ».

El espacio público tiene dimensiones físicas, sociales, culturales y políticas, arquitectónica y simbólica entre otras (Borja y Muxi, 2003; López de Lucio, 2000). Es un lugar de contacto entre las gentes, lugar de despliegue de imaginación y creatividad, lugar de celebración y lugar del juego. Es el lugar que permite la comunicación con los otros y la opción de reconocimiento mutuo (Viviescas, 1997, citado en Segovia y Jordan, 2005:18). Los espacios públicos pueden contribuir a la identidad colectiva de una comunidad. Cuanto más diversas sean las personas que hagan uso de ellos, más variadas serán las actividades que en ellos se desarrollen y más se enriquecerá la colectividad (Borja y Muxi, 2003). Esto convierte a los espacios públicos en escenas privilegiadas para la socialización y la construcción de la cohesión social. Las trabas en el acceso a ellos, desemboca en el temor y la desconfianza. El espacio público es un mecanismo esencial para que la ciudad cumpla su función de socialización de personas de todas las edades incluidos los marginados o considerados de 'riesgo' (Borja y Muxi, 2003; Segovia y Jordán, 2005). Este es un reto de las políticas sociales a escala de barrio y de ciudad. Éstas deben impulsar, promover y fortalecer una acción positiva dirigida a grupos vulnerables y de riesgo, contribuyendo eficazmente a crear un ambiente de seguridad.

La acción cohesiva de los espacios públicos se expresa a partir de nudos, de encuentros y desencuentros de dos ámbitos: el privado y el público, más las habilidades y experiencias que se adquieren o practican en cada uno de ellos. En ellos se incrementan ciertas habilidades privadas de comunicación, así como aquellas que podrían ser consideradas como componentes del capital social de la colectividad (Dascal, 2007). En lo que respecta a lo anterior, Cotte Poveda (2007) destaca que el capital Social adquiere importancia en su papel de factor necesario para estimular la cooperación mutua, establecer mejores redes de comunicación y promover una mayor cohesión entre los miembros de una comunidad.

2.4. El sentimiento de pertenencia y la identidad cultural

Las políticas que favorecen el pluralismo cultural y la diversidad influyen positivamente sobre la cohesión social. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio a los intercambios culturales y al desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública. La defensa de la diversidad supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías (De Carvalho, 2008).

Un caso revelador es el de Brasil, donde se ha reafirmado la diversidad cultural que caracteriza al gigante sudamericano, con la creación de la Secretaría de la Identidad y la Diversidad Cultural. En lo que respecta a los países andinos, se considera a la diversidad cultural como un valor en sí misma a partir de un orden de representación de lo social como culturalmente diverso (Rodríguez, 2006: 2). Reflexiones análogas, algunas más amplias, otras más restringidas, vienen desarrollándose paralelamente en otros países sudamericanos, como Bolivia, Ecuador y Venezuela. En tanto punto de partida, se reconoce que la diversidad de expresiones culturales es un factor que permite compartir ideas y valores.

En el caso de los migrantes, estos deben moverse entre dos culturas: la del país de origen y la del país de su nueva residencia. Dentro de ese contexto las mujeres son especialmente vulnerables a las presiones psicosociales, a las expectativas culturales divergentes, a la marginalización en el país de destino y a la doble responsabilidad laboral familiar. Ellas enfrentan en muchos casos una doble discriminación en el mercado del trabajo, como mujeres y como extranjeras.

2.5. La Protección Contra La Violencia Física Y La Seguridad Ciudadana

Partiendo de los estándares establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en materia de tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes y después de haber hecho un análisis comparativo por regiones, Kliksberg (2007) nos muestra que esa tasa se ha duplicado en los últimos 25 años en América Latina. En efecto, este incremento va desde 12,5 individuos por cada 100.000 habitantes en 1980 a 25,3 en 2006. En lo que concierne a las ciudades y los jóvenes, el mismo texto nos muestra que los mayores índices de homicidio se registran en los centros urbanos y que, en general, los jóvenes son el grupo social más afectado, siendo los homicidios la causa principal de muerte en algunos países como Brasil y Colombia. Sin duda, el incremento sostenido del fenómeno lo ha convertido en una amenaza indiscutible para la cohesión social en los países de la región.

Según este autor, las causas estructurales de la violencia endémica en América Latina son: la exclusión social y educativa, el desempleo (sobre todo de los jóvenes), la mala calidad de la educación o la ausencia de ésta y la desarticulación familiar. La combinación de estos factores deja a los jóvenes expuestos al reclutamiento del crimen organizado, que les ofrece soluciones para superar el sufrimiento cotidiano que implica su exclusión. Estas soluciones cubren el vacío generado por la ausencia de soluciones ofrecidas por el Estado.

La realidad que muestran las cifras se ve acrecentada por el sentimiento de inseguridad en la ciudadanía, en parte a causa de la “espectacularización mediática de la violencia juvenil” (CEPAL, 2008: 87). Este fenómeno mediático ha conducido a que, en las encuestas de opinión pública, haya una mayor preocupación y se alimente una demanda por priorizar el tema de la violencia juvenil por sobre la salud o la educación, incluso en países con niveles relativamente bajos de violencia y delincuencia juvenil. Esto conduce a la estigmatización de sectores específicos de la población juvenil, percibiéndose dentro de esa lógica a todo individuo bajo el perfil de joven, varón, suburbano y de bajos ingresos como una amenaza. En muchos casos esta estigmatización puede servir para tanto para la implantación de políticas de control social que recortan derechos ciudadanos, como para consolidar un fenómeno de profecía autocumplida: “tanto se les atribuye el rasgo de violencia a jóvenes de este perfil, que muchos de ellos pueden acabar asumiendo el estigma como guión”. (CEPAL, 2008: 87-88).

Como lo muestra el caso de Colombia, uno de los países con mayor número de homicidios en el mundo por cada 100.000 habitantes y el de mayor número de

homicidios en Iberoamérica, las causas de la violencia endémica registrada por el país entre 1950-2006, son de naturaleza compleja y multidimensional (Valenzuela, 2002). Estas causas están ligadas, en un sentido amplio, a la exclusión política, a la pobreza y a profundos desequilibrios socio-espaciales, que han obstaculizado el desarrollo del país “debido a las limitaciones que provienen de las estructuras sociales mismas, producto de relaciones basadas en la desigualdad, el bajo crecimiento económico y el insuficiente capital humano” (Cotte Poveda, 2007: 12). Uno de los factores más importantes se asocia en ciertas regiones con la ausencia de la presencia del Estado, las carencias económicas y la acción de grupos armados irregulares (narcotraficantes, guerrillas y paramilitares), que pueden actuar con relativa libertad gracias al pobre accionar de la justicia (Valenzuela, 2002:83).

El género interviene también en el ejercicio de la violencia física. Generalmente, muchas personas utilizan el término violencia de género como un sinónimo de violencia contra las mujeres. Igualmente, aunque en menor número, hay una violencia de género ejercida contra hombres, como el caso de hombres homosexuales o el abuso infantil y contra los jóvenes, por ejemplo. Según Rainero et al (2006:17), en América Latina es difícil estimar la magnitud real de violencia contra las mujeres debida a la escasa denuncia formal de estos casos, situación sostenida por la violencia institucional a la que son sometidas por parte de los organismos encargados de la seguridad y de la justicia, como así mismo por la indiferencia y/o la sanción negativa de la sociedad. La violencia de género se manifiesta en todas las etapas del ciclo vital de las mujeres y en algunas etapas del ciclo vital de los hombres, especialmente niñez y adolescencia (De La Cruz, 2008).

3. Ensayo de síntesis: los indicadores de la cohesión social y los grupos más afectados por el problema de la inseguridad

Como hemos visto, América Latina se encuentra enfrentada a diversas fuentes de inseguridad. Desde la perspectiva económica, las fuentes son multifacéticas y entre las principales se han destacado las provenientes de los procesos de globalización que han sido acompañados por el declive de la protección del empleo. La llamada “seguridad ciudadana” constituye un ámbito en que la ciudadanía y la cohesión social se vinculan estrechamente. Más que la pobreza, es la desigualdad, en asociación con otros factores sociales, culturales y psicológicos la que genera mayor inseguridad.

La persistencia de amplios sectores discriminados, con carencias y en desventaja respecto de la distribución de la riqueza y del ejercicio real de los derechos ciudadanos, es una voz de alerta para la cohesión social y la democracia. Estas carencias y desventajas tienen particular significación en países en los que factores tales como la edad, la etnicidad y el género refuerzan las condiciones de exclusión social. Ellas también son válidas en aquellos países que aplicaron políticas radicales de ajuste y liberalización de la economía, generando “ganadores” y “perdedores” en el nuevo escenario, reconstruyendo y reforzando una lógica de exclusión y discriminación. Los nuevos consensos sociales tendrán que tomar en cuenta a los sectores discriminados y excluidos

incorporando sus aspiraciones y sus necesidades. En este sentido, es necesario interrogarse no sólo sobre el impacto diferencial de las políticas, sino sobre la relación entre equidad social y de género, entre fractura cultural y desigualdades sociales, entre relaciones de exclusión e inclusión (Henríquez y Yépez, 2006; Klein, Fontan Tremblay, 2009).

Para completar el del análisis de los trabajos consultados, recurriremos a un cuadro en el cual cruzamos los diferentes indicadores de la cohesión social con los grupos sociales más afectados por los problemas de inseguridad, los que según la literatura consultada son: las mujeres; los migrantes; los indígenas y los afrodescendientes; y los grupos vulnerables en relación a la edad. Bajo el contexto de la globalización y la emergencia de la nueva economía basada en el conocimiento, la revisión de este cuadro permitirá sintetizar la problemática de la inseguridad con respecto a la cohesión social (Tabla 1).

En lo que refiere a la atención de las necesidades básicas de la población, uno de los problemas sociales más agudos en la realidad de América Latina tiene que ver con los sistemas de pensiones de jubilación, de acceso limitado e insuficiente por el bajo nivel de ingreso que otorga a los ancianos, si es que tienen derecho a una pensión. También debemos destacar una asimetría estructural y enraizada en el mercado laboral, que afecta a las mujeres manifestándose en menores salarios respecto de varones que desarrollan un trabajo similar, lo que se refleja a su vez en menores pensiones. Además, la falta de reconocimiento formal por el trabajo no remunerado en labores domésticas -desarrollado por mujeres en abrumadora mayoría- incluye un factor adicional de inequidad de género al momento de acceder a pensiones de jubilación.

Por su parte, la monoparentalidad, de alta incidencia en la región, generalmente recae en la mujer, quien como cabeza de familia deberá hacer frente al desafío de atender las necesidades básicas del hogar. La monoparentalidad es uno de los factores más importantes en la configuración de la pobreza urbana y sus modos de reproducción. La precariedad e informalidad del empleo femenino amplifica el conflicto.

Históricamente el uso del espacio urbano ha sido excluyente y restringido contra las mujeres. Esto es resultado de la prevalencia de patrones culturales con códigos discriminatorios y excluyentes. Estos patrones se ponen en evidencia con el contraste entre la abundancia de sitios de uso exclusivo para los hombres y la escasez de aquellos lugares destinados al uso femenino. La ciudad, en tanto construcción cultural, condiciona la vida de sus habitantes y determina el tipo y la calidad de intercambios entre ellos (Thomas, 1998).

La discriminación negativa, en el caso de las mujeres, se refleja en la escasa perspectiva de género en la planeación urbana. Empero, la confluencia entre ciudad y género permite descubrir nuevos elementos para impulsar políticas en la construcción de ciudad y ciudadanía (Borja, 1996). La exclusión de la condición femenina en la planificación urbana, es un fenómeno que se extiende también a otros grupos de población

vulnerables, como los migrantes. En este caso, los recién llegados a la ciudad -con muy poco acceso a las oportunidades- enfrentan serias dificultades en la satisfacción de sus necesidades básicas en materia de vivienda, trabajo, equipamientos y servicios.

La ausencia de titularidad de la propiedad de la tierra y las limitaciones del uso del espacio público son aspectos relevantes, que tocan de igual manera a zonas urbano marginales, en donde se establecen mayoritariamente grupos vulnerables de la población tales como campesinos pobres llegados a la ciudad, afrodescendientes segregados y ciudadanos afectados por el fenómeno de la nueva pobreza urbana. Adicionalmente, teniendo en cuenta que los servicios de educación y salud son limitados y cada vez de menor calidad conforme vamos desde los distritos centrales modernos y tradicionales hacia las periferias urbanas, estos grupos vulnerables sufren con mayor intensidad la insuficiencia de estos servicios públicos.

Otro fenómeno de segregación se pone en evidencia con la transformación de barrios en zonas de alta vulnerabilidad ante la ausencia de espacios adecuados para el uso de la ciudad por parte de ancianos, jóvenes y mujeres (Borja y Muxi, 2003), impidiéndoles el disfrute de los espacios públicos. En otras ocasiones, esta transformación sigue la pauta definida por un mejoramiento físico a través de inversión inmobiliaria y programas de vivienda a favor de una población con mayores recursos, generando el desplazamiento cultural, económico e incluso físico de la población menos favorecida.¹⁰

El sentido de la pertenencia y la identidad cultural es un tema que puede ser analizado desde el punto de vista de la diversidad de las expresiones culturales. Desde esta óptica podemos verlo como un factor, que permite compartir ideas y valores diversos. El ejemplo que podemos traer a colación es el de los migrantes. Éstos viven entre dos culturas: la del país de origen y la del país de su nueva residencia, lo cual implica, en muchos casos, la pérdida de sus valores tradicionales. También se verifica tal dualidad para los migrantes internos que dejan el campo empobrecido por la ciudad precaria. Este fenómeno conduce generalmente a la estigmatización de los grupos vulnerables y los expone a fuerzas que liquidan su identidad de origen y a su vez le niegan acceso a una "nueva" identidad, lo que aumenta el riesgo de su exclusión social.

La diversidad cultural es vista como un reto para el momento que estamos viviendo, en el que el crecimiento económico debe ir junto al desarrollo de la vida afectiva, moral, espiritual y creativa, componentes indispensables para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible. La diversidad cultural es fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. La defensa de la diversidad cultural supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos autóctonos (UNESCO, 2001). La cultura de la solidaridad que se ha manifestado a través de los lazos

10) Es el fenómeno conocido por el término inglés *Gentrification*, cuyo equivalente en español *Aburguesamiento* no expresa cabalmente el significado de la voz original. Se ha difundido en su lugar el término *Gentrificación*.

y redes de solidaridad primarios en espacios locales: familia, amigos, vecinos, etc., se han convertido en muchos de los países de la región en la principal forma de construcción de la cohesión social.

La pobreza, la ausencia de educación y la desintegración familiar son factores -en muchos casos concurrentes- que aumentan el riesgo de exclusión social a partir de un débil acceso a las oportunidades en el mercado laboral. En su mayoría, los afectados por esta problemática son jóvenes que viven en sectores urbanos periféricos. Así, estos jóvenes están expuestos al reclutamiento del crimen organizado o deciden refugiarse en pandillas y grupos violentos al margen de la ley, lo que se refleja en altos índices de criminalidad y delincuencia juvenil que conoce la región.

Conclusiones

¿Cómo actuar frente a la fragmentación, a la exclusión y a la situación de inseguridad social provocada por la mundialización? El desafío consiste en poner en operación nuevas instancias de regulación innovadoras permitiendo el equilibrio entre el crecimiento económico, la satisfacción de necesidades humanas, las formas de economía que dan un lugar importante a lo social en la definición de modalidades de regulación y de modalidades participativas de gobernanza¹¹ (Fainstein, 2001; Moulaert et Nussbaumer, 2008).

Estas modalidades deben permitir la expresión de la diversidad y la conflictividad entre los actores locales asegurando al mismo tiempo un liderazgo claro (Klein et al., 2010) y permitiendo canalizar esta conflictividad hacia objetivos socioeconómicos que movilicen los actores locales y refuercen su identidad, dando a su vez acceso a redes sociales que permitan una movilización diversificada de recursos (Klein, Fontan et Tremblay, 2009). Sobre este último tema, nuestro punto de vista coincide con diversos trabajos que tratan sobre nuevas formas de gobernanza territorial a escala regional y local que abundan sobre el sentido de la movilización del capital social, la puesta en escena de formas asociativas de gobernanza y el aumento de las capacidades de las comunidades, en el sentido que le da Amartya Sen (Vázquez Barquero, 2009; Hernández Medina, 2010; Onyx y Leonard, 2010).

Pero estas nuevas formas de gobernanza territorial y local deben unirse a una reformulación del Estado. Si bien hay consenso acerca de la necesaria revitalización del Estado para encarar las carencias de cohesión social que generan inseguridad, no lo hay en tanto y en cuanto a la forma de la participación del Estado en los esfuerzos por lograr la cohesión social requerida para alcanzar el desarrollo de los pueblos y su bienestar.

11) *www.rae.es: Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía; más allá de esta definición estricta, en el contexto de la globalización y el nuevo rol del Estado postfordista, la gobernanza se refiere a procesos colectivos, formales e informales, que determinan la manera en que se toman las decisiones, se elaboran normas y se construye instituciones en una sociedad (Hufty, 2007: 10).*

El estado latinoamericano ha presentado diversas caras en la historia reciente de América latina: clientelista, opresor, populista, a veces revolucionario. Oscilando entre la presencia excesiva y la ausencia, el Estado no ha logrado dar respuestas satisfactorias a las necesidades de las clases pobres o empobrecidas en cuanto al acceso a servicios estatales fundamentales como educación, salud y justicia debido a su debilidad frente a las fuerzas internacionales que imponen medidas de rigor fiscal y de debilitamiento de los programas públicos, y, también debido a la relación estructural existente entre las instituciones políticas y las organizaciones de poder nacionales e internacionales¹². Raras son las excepciones¹³. Sólo es posible construir una política, económica y social con una profunda transformación con miras a la inclusión social, dándole al Estado un papel fuerte pero flexible, que asegure la protección de los derechos ciudadanos pero que se adapte para que el ciudadano sea un actor de su desarrollo. La sociedad civil debe tener un rol y debe ser reconocida como un actor en el desarrollo. Para ello, será necesario crear un amplio sistema de protección y seguridad social que incluya las diferentes dimensiones del ser humano y que envuelva al conjunto de la sociedad.

12) *Como lo subrayó De Mattos en una comunicación presentada en el simposio intitulado "Nuevos pactos en la construcción de la cohesión social en las ciudades latinoamericanas", realizado en diciembre de 2008 en Santiago de Chile.*

13) *Se puede citar el caso de las políticas públicas en Costa Rica estudiadas por Ludwig Guendel (2008), quien pone énfasis en los arreglos redistributivos y marcos institucionales que se han aplicado en este país. El autor hace suyos los conceptos de la CEPAL en referencia a la integración, la pertenencia y la ciudadanía del individuo en cuanto a la construcción de la cohesión social.*

Tabla Nº 1:
Matriz del análisis cruzado de la cohesión social y la inseguridad

INDICADORES DE COHESIÓN SOCIAL	GRUPOS PRINCIPALMENTE AFECTADOS POR PROBLEMAS DE INSEGURIDAD			
	MUJERES	MIGRANTES INTERNACIONALES ET INTERREGIONALES	INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES ¹⁴	GRUPOS DE EDAD VULNERABLES (ANCIANOS, JÓVENES)
Respuestas a las necesidades básicas	. Desigualdad en el sistema de pensiones . Alto índice de mujeres como cabeza de familia mono parental	. Remesas de emigrantes: Cubre consumo básico, sin favorecer ni ahorro ni inversión	. Salud y educación insuficientes	. Acceso limitado a pensiones de jubilación
Mercado laboral	. Empleo femenino: Baja productividad, menor remuneración e informalidad.	. Discriminación en el país de destino por condición de migrante (legal o ilegal)	. Dificultad de acceso	. Empleo precario, parcial e informal.
Uso del espacio rural y urbano	. Falta de perspectivas de género en planeación urbana.	. Títulos de propiedad: carencia en zonas periféricas urbanas. . Desigualdad en el uso del espacio público urbano	. Ausencia de titularidad de la propiedad de la tierra	. Espacios inadecuados para los ancianos. . Discriminación de mujeres, jóvenes y ancianos.
La pertenencia y la identidad cultural	. Necesidad de expandir derechos a mujeres, migrantes, indígenas y jóvenes pobres.	. Pérdida de valores tradicionales.	. Exclusión Estigmatización	. Refugio de los jóvenes en pandillas y grupos violentos en busca de una identidad.
Protección contra la violencia	. Violencia doméstica. . Necesidad de incluir violencia de género y programas de seguridad ciudadana.	. Exposición al reclutamiento del crimen organizado.	. Exclusión social que provoca una violencia endémica.	. Delincuencia debido al desempleo juvenil. . Los jóvenes son el grupo social más afectado por la violencia. . Estigmatización mediática.

14) Incluimos la categoría afrodescendientes para considerar casos en los que estos grupos poblacionales son identificables y demográficamente significativos, sufriendo en muchos casos el fenómeno de la segregación y la estigmatización.

Referencias bibliográficas.

ARRIAGADA I., (2001) Seguridad ciudadana y violencia en América Latina. XXIII International Congress Session. N. U. CEPAL. Washington, Latin American Studies Association.

BEDOYA O. L., CASTIBLANCO A., ZULUAGA V., MALDONADO F. y PATIÑO G., (1999) Imaginario femenino y ciudad. Bogotá. TM Editores, 124 p.

BERNARD P., (1999) La cohesión sociale: critique dialectique d'un quasi-concept. Liens social et politique, Montréal, 41 : 47-61.

BLASCO GALLARDO, J. y ENGUITA N., mayo (2007) Imaginarios Urbanos en América Latina. Territorios Metropolitanos, 1(1): 109-119.

BOLTANSKI, Luc Boltanski y CHIAPELLO È., (1999). Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.

BORJA J., (1996) The city, democracy and governability: the case of Barcelona. International social Science Journal, UNESCO.

BORJA J., y MUXI Z., (2003) Espacio público: ciudad y ciudadanía, Barcelona, Diputación de Barcelona.

CASTEL, Robert. 2008. La citoyenneté sociale menacée. Cités 2008, 3(35) : 133-141. Paris, Presses Universitaires de France.

CASTEL, Robert. 2009. La montée des incertitudes: travail, protection, statuts de l'individu. Seuil Paris, collection Idées.

CASTELLS M. y HIMANEN P., (2002) The Information Society and the Welfare State: the finnish Model. Oxford University Press, 200 p.

CEPAL (2008) Juventud y Cohesión Social en Iberoamérica: un modelo para armar. Martín Hopenhayn (coord.), Santiago de Chile, 388 p.

COSTA S. y Gurza A., (2006) Cohesión Social y coexistencia intercultural en América Latina. En La Cohesión Social en la agenda de América Latina y la Unión Europea. J. Cotler (ed.), pp. 248-279. Lima, Instituto de Estudios Peruanos IEP: 296.

COTTE POVEDA A., (2007) Una explicación de las causas económicas de la violencia en Colombia. Grupo de Investigaciones en Violencia, Instituciones y Desarrollo Económico (VIDE). Universidad de La Salle, Colombia.

DASCAL G., (2007) Los espacios públicos y el capital social : aportes para comprender la relación entre ambos conceptos. Cuadernos de Geografía, 16: 19-26. Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia.

DE CARVALHO J. J., (2008) Diversidad cultural y Saberes Tradicionales en América Latina: una agenda de resistencia y creatividad. Ministerio de Cultura, Brasil.

DE LA CRUZ C., (2008) Seguridad de las mujeres en el espacio público: aportes para las políticas pública. En Seguridad y violencia en América Latina: un reto para la democracia. Pensamiento Iberoamericano, segunda época, 2: 205-223.

DURKHEIM É., (1933) La Division du Travail dans la Société. Paris, Presses Universitaires de France.

EDWARD W. Said, (1996) Cultura e imperialismo, traducción de Nora Castelli, Barcelona, Anagrama, 546 p.

ENRIQUEZ, D., (2008) La transformation des bidonvilles péruviens en nouvelles villes émergentes : de la solidarité sociale à la création de marchés. Université du Québec à Montréal, Mémoire de maîtrise.

ESPING-ANDERSEN G., (1990) The three worlds of welfare capitalism. Princeton University Press.

FAINSTEIN S., (2001) Inequality in global city-regions. En Global City-Regions: Trends, Theory, Policy. Allen John Scott (ed.). Oxford: Oxford University Press, pp. 20-25.

FALUDI A., (2007) Territorial Cohesion Policy and the European Model of Society. European Planning Studies, 15(4): 567-583.

FORREST R. y KEARNS A., (2001) Social cohesion, social capital and the neighbourhood. Urban Studies, 38 (12): 2125-2143.

GIRALDO F. y VIVIESCAS F., (1996) (Compiladores) Pensar la ciudad. Bogotá: Tercer Mundo Editores, Cenac y Fedevivienda. 485 p.

GUENDEL L., (2008) Costa Rica: Arreglos redistributivos y marcos institucionales para el logro de la Cohesión Social. Seminario Desigualdades y Políticas Públicas: ¿Cómo reducir la desigualdad en Costa Rica?. San José.

HARVEY D., (1989) From managerialism to entrepreneurialism: the transformation of urban governance in late capitalism. Geografiska Annale, 71: 3-17.

HENRIQUEZ N. y YÉPEZ I., (2006) Género, Desigualdad y Cohesión Social en América

Latina. En La Cohesión Social en la agenda de América Latina y la Unión Europea. J. Cotler (ed.), pp. 139-184. Lima, Instituto de Estudios Peruanos IEP: 296.

HERNANDEZ MEDINA E., Social Inclusion through Participation: the Case of the Participatory Budget in São Paulo. International Journal of Urban and Regional Research, 34 (3): 512-532.

HUFTY M., (2007) La gouvernance est-elle un concept opérationnel ? : Proposition pour un cadre analytique. Fédéralisme Régionalisme, 7 (2). Société civile, globalisation, gouvernance: aux origines d'un nouvel ordre politique? Le Portail de Publication de Périodiques Scientifiques (PoPuPS), Université de Liège.

JENSON J., (1998) Mapping social cohesion: The state of Canadian research. Canadian Policy Research Networks Study No. F-03.

JENSON J., (2002) Identifying the Links: Social Cohesion and Culture. Canadian Journal of Communication, 27 (2): 141-151.

KLIKSBERG B., (2007) Mitos y realidades sobre la criminalidad en América Latina: Algunas anotaciones estratégicas sobre cómo enfrentarla y mejorar la cohesión social. Fundación Internacional Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), 45 p.

LAVILLE J-L., (2008) Cinq orientations pour prolonger la réflexion. En Pour une autre économie de l'art et de la culture, Colin Bruno et Gautier Arthur (eds.), Toulouse, ÉRÈS, pp. 161-166.

LOPEZ de LUCIO R., (2000) El espacio público en la ciudad europea: entre la crisis y las iniciativas de recuperación. Implicaciones para Latinoamérica. Revista de Occidente, 230 231.p. 105-121.

LOW S., (2000) On the plaza: the politics of public space and culture. Austin, University of Texas Press, 296p.

LUPTON R. y FULLER C., (2009) Mixed Communities: A New Approach to Spatially Concentrated Poverty in England. International Journal of Urban and Regional Research, 33: 1014-1028.

KLEIN J. L., FONTAN J-M., SAUCIER C., TREMBLAY D-G., TREMBLAY P-A. y SIMARD M., (2010) La lutte contre la pauvreté et l'exclusion et l'économie sociale: conditions gagnantes des initiatives locales. Revue Vie Économique, 1 (4).

KLEIN J. L. FONTAN J-M. y TREMBLAY D-G., (2009) Social entrepreneurs, local initiatives and social economy: foundations for a socially.

innovative strategy to fight against poverty and exclusion. *Canadian Journal of Regional Research/ Revue canadienne de science régionale*, 32 (1): 23-42

MOULAERT F. y NUSSBAUMER J., (2008) Social innovation between Local and Global. En *Varieties of capitalism and new institutional deals*. Wolfram Elsner y Hardy Hanappi (eds.), Northampton, Massachusetts, pp. 259-280. *Studies in evolutionary political economy*. Edward Elgar Publishing Limited.

O'DONNELL G., (2003) Acerca del Estado en América Latina: Diez tesis para discusión. Dirección para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (DRALC-PNUD). *La Democracia en América Latina*. Universidad de Notre Dame, 49 p.

ONYX J. y LEONARD R., (2010) The Conversion of Social Capital into Community Development: an Intervention in Australia's Outback. *International Journal of Urban and Regional Research*, 34 (2): 381-397.

QUESADA AVENDANO F., (2006) Imaginarios urbanos, espacio público y ciudad en América Latina, *Revista de Cultura, Pensar Iberoamérica*, No. 8 abril-junio 2006.

PAHL, Raymond Edward. 1991. The search for social cohesion: from Durkheim to the European Commission. *European Journal of Sociology*, 32: 345-360. Cambridge University Press.

RAINERO L., RODIGOU M. y PÉREZ S., (2006) Herramientas para la promoción de ciudades seguras desde la perspectiva de género. Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur (CISCSA), Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer (UNIFEM), Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Córdoba, Argentina, 86 p.

RAMOS J. (2009) Flexiseguridad: seguridad laboral y modernización de la protección social. *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración*, Nro IX, Julio. Madrid, pp. 77-89.

REBOLLEDO L., (1998) Género y espacios de sociabilidad. El barrio, la casa y la calle, en las percepciones de hombres y mujeres, *Género y espacios de Sociabilidad*. Ediciones PIEG, Santiago de Chile. 176 p.

REGUILLO R. (2000) Los laberintos del miedo: un recorrido para fin de siglo. *Estudios sociales*, 5: 63-72. Universidad de Los Andes, Colombia.

RODRÍGUEZ A. y SUGRANYES A., (2005) Los con techo: Un desafío para la política de vivienda social. Santiago de Chile, Ediciones SUR.

RODRÍGUEZ S., (2006) El Espacio de identificación cultural. Papeles del Centro de Estudios sobre la identidad Colectiva (CEIC), 2006-1 (24). Universidad del País Vasco, 23 p.

SABORIDO M., (1999) Ciudad y relaciones de género. CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo, 35 p.

SABORIDO M. y SEGOVIA O., (1997) Espacio público barrial. Una perspectiva de género. Documento de Trabajo N° 163, SUR ediciones, Santiago de Chile.

SAINT-MARTIN D., (2004) Rol del Estado: de Providencia a Inversionista Social. *Foro Internacional*, 176, XLIV, 2004 (2), pp. 281-300

SASSEN S., (1996) *Losing control?: sovereignty in an age of globalization*. Columbia Press University, New York, 169 p.

SASSEN S., (ed.) (2002) *Global networks, linked cities*. Routledge, New York.

SCOTT A. J.,(ed.) (2001) *Global City Regions: Theory and Policy*. Oxford: Oxford University Press, 369 p.

SEGOVIA O. y JORDAN R., (2005) Espacios públicos urbanos, pobreza y construcción social. En *SERIE Medio ambiente y desarrollo*. División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL. Santiago de Chile. 52p.

SERVILLO L., (2008) Urban policy and the objective of Territorial Cohesion in Europe. En *The Re-Creation of the European City: Governance, Territory & Polycentricity*, Rob Atkinson and Cristiana Rossignolo (eds.), pp. 39-64. Techne Press, Amsterdam, 272 p.

SILVA A., (1997) *Imaginarios Urbanos*. Arango Editores, Bogotá.

SPARKE M., (2005) *In the space of the theory: Post foundational Geographies of the Nation-State*. University of Minnesota Press, 401 p.

THOMAS F., (1998) *Pensar la ciudad para que ella nos piense: una mirada femenina sobre la ciudad*. En *Pensar la ciudad*. Favio Giraldo y Fernando Viviescas (comp.), p. 409-414. Bogotá: Editor TM.

TOKMAN V., (2007) *Informalidad, inseguridad y cohesión social en América Latina*. CEPAL, Serie Políticas Sociales Nro 130. División de Desarrollo Social. Naciones Unidas. Santiago de Chile.

TREMBLAY, D-G.,(ed.) (2008) *Flexibilité, sécurité d'emploi et flexicurité : les enjeux et défis*. Presses de l'université du Québec.

UNESCO (2001) *Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural*, Paris.

UTHOFF A., (2010) *Una seguridad social dinámica para las Américas: Cohesión Social*

y Diversidad Institucional. Evolución y Tendencias. Asociación Internacional de la Seguridad Social, Ginebra.

VALENZUELA P., (2002) Reflexiones sobre interpretaciones recientes de la violencia en Colombia. Reflección política No 8, p 77-90.

VAZQUEZ BARQUERO A., (2009) Una salida territorial a la crisis: Lecciones de la experiencia latinoamericana. Revista EURE Santiago, 35 (105): 5-22.

VIVIESCAS F., (1997) Espacio público, imaginación y planeación urbana. En La calle: lo ajeno, lo público y lo imaginado. Publicaciones Barrio Taller, Serie Ciudad y Hábitat, 3 (4): 3-22. Santa Fe de Bogotá.

WAGMAN D., (2004) Los cuatro planos de la seguridad. Gobernabilidad y seguridad sostenible, Barcelona (Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña), pp. 1695-1115, Nº. 17, 2004. Ponencia presentada en el congreso "Política social y seguridad ciudadana" - Escuela Universitaria de Trabajo Social, Vitoria-Gasteiz, noviembre 2003.

YUDICE G., (2008) Medios de Comunicación e Industrias Culturales, Identidades Colectivas y Cohesión Social. Instituto Fernando Henrique Cardozo (IFHC-Sao Paulo) y Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN-Santiago de Chile)

VALENZUELA P., (2002) Reflexiones sobre interpretaciones recientes de la violencia en Colombia. Reflección política No 8, p 77-90.

VAZQUEZ BARQUERO A., (2009) Una salida territorial a la crisis: Lecciones de la experiencia latinoamericana. Revista EURE Santiago, 35 (105): 5-22.

VIVIESCAS F., (1997) Espacio público, imaginación y planeación urbana. En La calle: lo ajeno, lo público y lo imaginado. Publicaciones Barrio Taller, Serie Ciudad y Hábitat, 3 (4): 3-22. Santa Fe de Bogotá.

WAGMAN D., (2004) Los cuatro planos de la seguridad. Gobernabilidad y seguridad sostenible, Barcelona (Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña), pp. 1695-1115, Nº. 17, 2004. Ponencia presentada en el congreso "Política social y seguridad ciudadana" - Escuela Universitaria de Trabajo Social, Vitoria-Gasteiz, noviembre 2003.

YUDICE G., (2008) Medios de Comunicación e Industrias Culturales, Identidades Colectivas y Cohesión Social. Instituto Fernando Henrique Cardozo (IFHC-Sao Paulo) y Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN-Santiago de Chile).